

80110
Bogotá D.C

2014EE0074876



Doctora
NUBIA OROZCO ACOSTA
Directora Autoridad Nacional de Licencias Ambientales
Calle 37 No. 8-40
Ciudad

General
RODOLFO PALOMINO LOPEZ
Director Policía Nacional
Carrera 59N° 26-21, CAN
Ciudad

Doctor
JORGE ENRIQUE VELEZ GARCIA
Superintendente de Notariado y Registro
Calle 26 No. 13-49 Interior 201
Ciudad

Doctor
UBEIMAR DELGADO BLANDÓN
Gobernador del departamento del Valle del Cauca
Carrera 6 entre calles 9 y 10 Edificio Palacio de San Francisco
Cali – Valle del Cauca

Doctor
OSCAR LIBARDO CAMPO VELASCO
Director Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca
Carrera 56 # 11 – 36
Cali – Valle del Cauca

Referencia: Función de Advertencia- Titulación de predios en terrenos pertenecientes al Sistema de Parques Nacionales Naturales y al Sistema de Áreas Protegidas – menoscabo ambiental y ausencia de medidas de control.

Respetados doctores y general:

Con ocasión de la labor de control fiscal desarrollada por la Contraloría General de la República, enfocado a la participación ciudadana y específicamente al marco de vigilancia de las decisiones de carácter administrativo con la potencialidad de afectar el medio ambiente, se detectaron riesgos que comprometen los recursos públicos representados en las áreas de terreno pertenecientes al Sistema de Parques

Nacionales Naturales y al Sistema de Áreas Protegidas, que ameritan el ejercicio de la función de advertencia prevista en el artículo 5, numeral 7 del Decreto – Ley 267 de 2000. Lo anterior fundamentado en los siguientes:

HECHOS Y CONSIDERACIONES

La Contraloría General de la República ha tenido oportunidad de asistir a través de sus delegados a diferentes reuniones y audiencias que se han llevado a cabo en torno a la problemática persistente de minería ilegal y aprovechamiento ilícito de recursos naturales que se ha venido dando en jurisdicción del Parque Nacional Natural Farallones de Cali, encontrándose que dichas actividades de impacto humano han causado un paulatino y marcado deterioro en el entorno protegido de dicha área natural, con especial énfasis en la afectación que han padecido los recursos acuíferos - por el empleo indiscriminado del mismo, la generación de vertimientos y contaminantes como el cianuro y el mercurio y la modificación de los lechos de quebradas y afluentes - así como la flora y fauna de tal región.

Resulta de la mayor importancia señalar que el área afectada constituye un importante baluarte de acopio de agua, de la cual se surte buena parte de los acueductos de los municipios de la región, inclusive el del municipio de Santiago de Cali, a la vez que alberga ecosistemas de importancia capital como el de bosque alto andino, que por su naturaleza constituye el hábitat de una amplia variedad de especies tanto nativas como endémicas, que a su vez aporta gran cantidad de agua a los afluentes cercanos gracias a su capacidad de captación de agua del ambiente. Agua de la que a la postre se terminará beneficiando un importante número de personas cuya ubicación se encuentre dentro del área irradiada por la reserva natural en mención.

Dentro las aludidas reuniones se ha venido denunciando de manera permanente que pese al anuncio realizado por el señor Superintendente de Notariado y Registro el 12 de junio de 2012 respecto de la congelación de los títulos de propiedad de predios detectados en la reserva natural mencionada - como medida preventiva para evitar cualquier tipo de negociación con tales predios a fin de conjurar las irregularidades que se han presentado con la venta de predios en el Parque Natural y su zona de reserva forestal a particulares, con la consecuente invasión de personas sobre tales terrenos - se ha seguido con tal procedimiento de titulación y de disposición en el área protegida, con lo cual no solo se continua el efecto de degradación ambiental de la reserva sino que además se desconocería lo previsto en el art. 74 de la ley 160 de 1994 y en general la normativa que de manera puntual protege las zonas de reserva protegidas y prohíbe de manera expresa su ocupación, siendo por tanto necesario revisar y llegado el caso revocar las determinaciones que en tal sentido se hubiesen emitido.

Igualmente se ha encontrado que los grandes esfuerzos llevados a cabo por los funcionarios adscritos a Parques Nacionales Naturales de Colombia en lo atinente a acciones de control y mitigación de las actividades dañinas desplegadas al interior de esta área protegida, han tenido insuficiente trascendencia, en gran parte motivado ello por el escaso apoyo y acompañamiento que han recibido por parte de la Gobernación del Departamento del Valle del Cauca, la Policía Nacional y la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca al momento de ejecutar tales labores. Dicha contingencia

no solo da al traste con tales esfuerzos realizados, sino que puede tener como perversa consecuencia que incluso se incentive la actividad depredadora, ya que los agentes activos de la misma pueden sentirse amparados en la eventual ausencia de medidas de fuerza legítima para continuar con la ruina de los valiosos recursos naturales sobre los que ejercen su perniciosa actividad.

Por último se ha encontrado que la autoridad ambiental aparentemente ha omitido la estricta verificación a que ha de someterse la actividad minera que puede estar desarrollándose en el sistema montañoso del cual hacen parte los Farallones de Cali, con la consecuente ausencia de control sobre el irreparable daño que puede infligirse a tan delicado ecosistema, por lo que es del caso extremar los controles que dentro del ámbito de sus competencias deba realizar sobre el particular.

MARCO JURÍDICO

El artículo 267 de la Constitución Política señala:

"(...) El control fiscal es una función pública que ejercerá la Contraloría General de la República, la cual vigila la función fiscal de la administración y de los particulares o entidades que manejen fondos de la Nación (...)"

Por su parte, el numeral 7 del artículo 267 de 2000, indica:

"(...) FUNCIONES: Para el cumplimiento de su misión y de sus objetivos, en desarrollo de las disposiciones consagradas en la Constitución Política, le corresponde a la Contraloría General de la República (...):

7. Advertir sobre operaciones o procesos en ejecución para prever graves riesgos que comprometan el patrimonio público y ejercer control posterior sobre los hechos así identificados..."

El artículo 6 de la Ley 610 de 2000, dispone:

"(...) Daño patrimonial al Estado: Para efectos de esta Ley se entiende por daño patrimonial al Estado la lesión del patrimonio público, representada en el menoscabo, disminución, perjuicio, detrimento, pérdida o deterioro de los bienes o recursos públicos o a los intereses patrimoniales del Estado, producida por una gestión fiscal antieconómica, ineficaz, ineficiente e inoportuna, que en términos generales, no se aplique al cumplimiento de los cometidos y de los fines esenciales del Estado, particularizados por el objeto funcional y organizacional, programa o proyecto de los sujetos de vigilancia y control de las contralorías. Dicho daño podrá ocasionarse por acción u omisión de los servidores públicos o por la persona natural o jurídica de derecho privado que en forma dolosa o culposa produzca directamente o contribuyan al detrimento público"

FUNCIÓN DE ADVERTENCIA

Por los hechos y consideraciones jurídicas anteriormente expuestos y teniendo en cuenta la necesidad de proteger los recursos públicos y especialmente el medio ambiente, se hace indispensable que las entidades a sus dignos cargos, tomen medidas frente a la eventualidad de riesgo de pérdida o deterioro de los recursos naturales y haberes estatales dentro del procedimiento de titulación de tierras dentro de áreas proscritas para tales actividades por hacer parte del Sistema de Parques Nacionales Naturales y al Sistema de Áreas Protegidas, así como las que resulten necesarias para prevenir o mitigar el daño producto de actividades mineras ilegales desarrolladas en dicha área protegidas, las cuales resultan una causa directa de la afectación a la salud por el consumo de agua contaminada con metales pesados derivados de tal actividad.

Esta advertencia se realiza sin perjuicio del control posterior a las acciones correctivas que se espera que se adelanten, para la debida gestión y protección de los recursos del Estado, las cuales deberá ser informadas a este organismo en un término no mayor a diez (10) días al recibo de la presente comunicación.

Atentamente,



SANDRA MORELLI RICO
Contralora General de la República

Aprobó: Ana María Silva Bermúdez
Contralora Delegada para el sector Minas y Energía 